

Contra el Decreto de la Presidencia por el que se resuelva el recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.

b) Contra las resoluciones de los Directores Generales, que no agotan la vía administrativa, podrá, asimismo, interponerse recurso de alzada ante el Consejero correspondiente, como órgano competente para resolverlo, o ante el mismo Director General.

c) Los Decretos de la Presidencia y los acuerdos del Consejo de Gobierno, aptos que ponen fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra los Decretos del Consejo de Gobierno, disposiciones administrativas de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa, salvo que el recurso se interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma de recurso potestativo de reposición e interponiéndose directamente ante el Consejo de Gobierno, como órgano que dictó dicha disposición, de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

d) El recurso potestativo de reposición habrá de interponerse en el plazo de un mes desde la notificación o la publicación del acto recurrido, si es expreso; si no lo fuera, en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de un mes desde su presentación, entendiéndose desestimado si no se dictara resolución expresa en dicho plazo.

e) Las decisiones de las Presidencias y los acuerdos de los Consejos de Administración de las Sociedades y Empresas municipales existentes, o de las que se pudieran constituir por la Ciudad de capital íntegramente público, dependientes o vinculadas a la Ciudad Autónoma, que como actos separables estén sujetos al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, podrán ser potestativamente recurridos en reposición ante el órgano que los hubiere dictado en el plazo de un mes desde su notificación o publicación, si fuera expreso, entendiéndose desestimado el recurso si transcurriese un mes desde su presentación.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento y sus anexos será promulgado por el Presidente en el plazo de diez días, a contar desde su aprobación y entrará en vigor al día siguiente en que termine su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

En Melilla, a 26 de abril de 1999.

El Presidente de la Ciudad. Enrique Palacios Hernández.

El Consejero de Presidencia. Juan Imbroda Ortiz.